

Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

SE PUBLICA los martes, jueves y sábados a cada semana.

SE SUSCRIBE en esta capital, Imprenta de D. Francisco Paz, Fuente del Rey núm. 18.

—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRECIOS DE SUSCRIPCION, en Orense, por trimestre, 2 escudos.

—Para fuera de esta capital, franco de porte por trimestres adelantados, 3 escudos.

—Números sueltos, 150 MILÉSIMAS.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Circular.

En el día de ayer han sido entregados en la Administración de Correos los últimos paquetes de cédulas del sufragio, dirigidos á los Sres. Alcaldes de la circunscripción de Ginzó, con el fin de que las comisiones repartidoras á que se refiere el artículo 5.º del decreto de 30 de diciembre de 1868, puedan distribuirlos á domicilio entre los electores de los colegios respectivos.

Próximo ya el día 20 del actual, en que han de comenzar las elecciones en dicha circunscripción para un Diputado á Cortes, preciso es que los Sres. Alcaldes y comisiones referidas activen con celo é inteligencia los trabajos preparatorios; de modo que el día 19 del corriente no exista un solo elector sin la cédula talonaria que le servirá de credencial para reconocerle el derecho al sufragio.

Si por algún motivo imprevisto dejase de llegar á su destino uno ó mas paquetes de los mencionados, y los Sres. Alcaldes de la citada circunscripción no los tuvieran en su poder al recibo de esta circular, lo pondrán inmediatamente en mi conocimiento para remitirle nuevas cédulas y para instruir el expediente oportuno en averiguación de las causas que hayan motivado el extravío; en la inteligencia que será exigida la mas estrecha responsabilidad á los que faltaren al cumplimiento de esta circular.

Encargo muy especialmente á los señores Alcaldes y comisiones repartidoras la mayor imparcialidad en la repartición de las cédulas, y espero de su sincero respeto á mis disposiciones y á las instituciones vigentes que no daran lugar á que la autoridad judicial intervenga para corregir y castigar cualquier abuso.

Orense 12 de enero de 1870.—El Gobernador, D. Gaspar Gemio y Fuentes.

COMANDANCIA MILITAR DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Para que todos los individuos de la clase de retirados de la provincia, en particular los sargentos, cabos y soldados que no han jurado aun la Constitución democrática, hecha y sancionada por las Cortes Constituyentes de 1869, puedan verificarlo dentro del plazo que señala la ley de 9 de diciembre último, inserta en la tercera plana, segunda columna del Boletín oficial de 28 del propio mes, número 153, los señores Alcaldes de fuera de la capital les harán convocar inmediatamente ante su autoridad con dicho objeto, y después de levantar el acta que previene la circular del suprimido Gobierno militar de 28 de junio del mencionado año de 1869, inserta en dicho periódico, publicado en el siguiente día 29, núm. 77, les facilitarán el oportuno certificado que cada uno debe presentar al señor Administrador económico de la provincia para evitar se les dé de baja en las nóminas de la clase á que pertenecen.

Los señores J. les y Oficiales que oportunamente han prestado dicho juramento, pueden presentarse por sí ó por medio de sus apoderados en la secretaría de esta Comandancia militar para recibir el correspondiente certificado; y en el día de mañana, lo verificarán personalmente en mi casa-pesada los retirados de la clase de tropa que no han jurado y residen en el distrito municipal de esta capital.

Orense 12 de enero de 1870.—El Coronel Comandante militar, Costa.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS.

Circular.

Próximo ya á realizarse el desestanco de la sal, en virtud de la ley decretada y sancionada por las Cortes Constituyentes, parece necesario renovar la memoria de algunos hechos ocurridos en época aun no remota, para hacer patente la oportunidad de adoptar una medida que señale con anticipación la suerte que ha de caber á los que de nuevo intenten promoverlos, por mas que en

la generalidad de los casos no obren por inclinación á cometer el delito en que realmente incurren.

Alude la Dirección á los atentados cometidos contra los salineros de la Hacienda pública en estos últimos meses. Todo el afán de los defraudadores se dirigió á apoderarse de las existencias de sal que aquellos contenían, y aunque en algunos puntos no consumaron su criminal intento, merced á la energía y valor del resguardo, en otros, venciendo por la superioridad del número á la fuerza represora, consiguieron al fin realizarlo; pero no sin que ocurrieran escenas lamentables, que todavía hubieran podido tener mas tristes consecuencias á no mediar la prudencia y abnegación con que se condujeron, á riesgo de sus propias vidas, los dependientes de aquel Cuerpo.

Y como los atentados de que se trata tuvieron lugar cuando la ley del estanco imperaba con todo su rigor y sabían los perpetradores de aquellos delitos las penas aflictivas á que se exponían, teme la Dirección que cuando el desestanco sea un hecho consumado, no faltará quien dando á esta medida una significación absurda, una latitud indebida ó una interpretación violenta, trate de inducir á las gentes sencillas y menesterosas del pueblo á la repetición de aquellas graves escenas.

Deber es de una administración previsora el precaver en tiempo oportuno semejantes desmanes, tanto para evitar los perjuicios que se irrogarian con ellos á la Hacienda pública, cuanto para alejar los peligros, persecuciones y castigos á que se verían expuestos los delincuentes.

A este fin se dirige, pues, la presente orden; y como la Dirección está penetrada del celo de V. S., no vacila en esperar que secundará sus propósitos, comunicando claras y precisas instrucciones á todos los Alcaldes para que por medio de frecuentes pregones y de edictos fijados en los sitios mas concurridos y

públicos de los pueblos, inculquen en el ánimo de sus administrados la idea de que el desestanco no los autoriza para apoderarse de las sales existentes en las fábricas, almacenes y lagunas, ni de las aguas muertas de los manantiales y espumeros custodiados por el Resguardo; advirtiéndoles, para que en ningún caso puedan alegar ignorancia, que todos los que tratasen por cualquier medio de usurpar á la Hacienda lo que es de su legítima propiedad, serán aprehendidos y entregados á los tribunales de Justicia para que se les juzgue é imponga sin contemplación de ningún género las penas á que sean acreedores, según la importancia del delito.

Sirvaso V. S. por su parte disponer la inserción de esta orden en el Boletín oficial de la provincia y acusarme su recibo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de diciembre de 1869.—Lopo Gisbert.—Sr. Gobernador de la provincia de....

(Gaceta núm. 8.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

Instrucción pública.—Negociado 2.º

Ha llamado la atención de S. A. el Regente del Reino la frecuencia con que los Maestros de primera enseñanza acuden á este Ministerio en solicitud de que se les autorice para servir sus Escuelas por sustituto ó pretendiendo largas licencias por motivos de salud plenamente justificados. No es escaso tampoco el número de expedientes de separación de Maestros, de los que no resulta otro cargo contra el Profesor que el haberse inutilizado en la enseñanza después de muchos años de servicios. Privados estos modestos funcionarios de toda clase de derechos pasivos, llegan á edad avanzada ó contraen una enfermedad crónica que les inutiliza; y en la durísima alternativa de quedarse sin recurso alguno ó de seguir al frente de la Escuela á costa de esfuerzos imposibles, optan necesariamente por este medio, no sin grave per-

juicio de la... que necesita como
primer elemento condiciones de salud y
rebuir por parte del educador que ha
de ampliar grandísima actividad y ejer-
cicio continuo de todas sus facultades si
ha de dar resultados positivos en el des-
empeño de su cargo. La declaración de
derechos pasivos sería el oportuno reme-
dio de este mal y la justísima recompen-
sa de los que han gastado su vida en pro
de la enseñanza pública; pero atravesan-
do hoy la Nación un período difícil de
reconstitución general administrativa y
económica, siéntase á un tiempo toda
clase de necesidades amortiguadas hasta
hacer poco por un sistema esencialmente
centralizador; e abunda de recursos para
atender á tan múltiples obligaciones, no
es posible todavía imponer este gravamen
á los pueblos, á las provincias ó al Es-
tado; y aunque haya otros medios de
atender á esta necesidad, tampoco es po-
sible aun plantearlos, porque todos ellos
se cruzan estrechamente con medidas
de gran trascendencia que no pueden
adoptarse sin las debidas condiciones de
tiempo, estudio y oportunidad.

El Gobierno de S. A., en tanto que
consigna el derecho de jubilación para
los Maestros de primera enseñanza, cree
hacer un bien á las Escuelas admitiendo
en ellas Maestros con las posibles garan-
tías que substituyan á los titulares inutili-
zados en el servicio por edad ó enferme-
dad: considerada en el ejercicio de su pro-
fesion, que renuncian á las condiciones
que aquellos ya perdieron con el transcur-
so de los años; que esta intinidad, bien
entendida, es mejor que la falta de vida
en las Escuelas; y estima también como
beneficioso á estos profesores propieta-
rios el conservar sus Escuelas hasta el
fin con el justo título que le dieron sus
conocimientos y sus años, no sin exigir-
les la precisa responsabilidad en el buen
desempeño de su Escuela en cuanto al
sustituto que presenten. Por tanto S. A.
se ha servido disponer:

1.º Los Maestros titulares de Escue-
las públicas que hubieren obtenido sus
plazas por los trámites legales y contaren
por lo menos 15 años de servicio en ta-
les condiciones podrán seguir sus desti-
nos por sustituto retribuido de su cuenta.

2.º Para optar á este beneficio se
instruirá un expediente en que el Maes-
tro haga constar su absoluta imposibili-
dad para el servicio activo, con certifica-
ción de tres Facultativos, informe y acep-
tación del sustituto por parte de la Junta
local de primera enseñanza y Ayunta-
miento respectivo; exigiéndose al referido
sustituto título suficiente á la plaza que
ha de servir, informe de la Junta provin-
cial y del Inspector del ramo; reserván-
dose este Ministerio la resolución definitiva.

3.º Si el Maestro renunciare su de-
recho á designar el sustituto, lo hará el
Ayuntamiento, previa la correspondiente
propuesta de la Junta provincial.

4.º En la provisión de Escuelas por
concurso ó oposición será quien prefe-
rente, en igualdad de circunstancias en-
tre los aspirantes, el haber sustituido Es-
cuelas con derecho por Maestros inutili-
zados.

Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1870.—El Ge-
n.- Sr. Director general de Instrucción
pública.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Circular general.

Excmo. Sr.: Consecuente á la ley de
18 de diciembre último, el R. Gen- te del
Reino se ha servido disponer que por las
Autoridades militares competentes pue-
da recibirse el juramento á la Constitución
hasta el 19 del corriente, en la forma
prevista en las ordenes expedidas por
este Ministerio en 9 y 21 de junio del
año próximo pasado, á todas las clases
militares que todavía no lo hubieren ve-
rificado; asimismo ha resuelto S. A. que
los Capitanes generales expidan certifica-
do de haber jurado la Constitución á to-
dos los jefes del ejército y retirados
que soliciten dicho documento, á cuyo
efecto los funcionarios á quienes se
haya verificado el acto de la jura pasaran
copias autorizadas á los Capitanes ge-
nerales de los distritos respectivos. Los
Consules ó representantes en el extranje-
ro podrán facilitar igual certificado á los
militares ó retirados que hubieren jurado
ante ellos en cumplimiento de las referi-
das disposiciones.

De orden de S. A. lo digo á V. E.
para su conocimiento y fines consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1870.—Prim.-
Señor....

MINISTERIO DE HACIENDA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instrui-
do en esa Dirección general con motivo
de una consulta de la Contaduría de Ha-
cienda pública de Huesca acerca de si
las cantidades procedentes de aquellos
camisos cuya distribución no puede jus-
tificarse entre los legítimos partícipes,
bien por fallencia de la deserción ó sen-
tencia judicial ó gubernativa, deben rein-
tegrarse al Tesoro ó ingresar en el fondo
de entretenimiento de la Comandancia
de Carabineros para darles la aplicación
que estime mas conveniente:

Considerando que nunca pueden ale-
garse causas bastante mente fundadas para
despojar á los partícipes en las aprehen-
siones del delito que les corresponde y
les ha sido reconocido y liquidado, pues
de otro modo resultaría que se atacaba
directamente al derecho de propiedad,
lo cual no puede consentirse ni autori-
zarse la ley, cualquiera que sea el pre-
texto que se invoque:

Y considerando que tan solo dos ra-
sas pueden presentarse respecto del asun-
to de que se trata, cuales son: el fal-
tamiento de algunos de los partícipes ó
su deserción del cuerpo de que forman
parte; siendo evidente que en el primero
transmiten el derecho á sus legítimos he-
rederos, y en el segundo no pierden el
que tenían adquirido, como no pueden
tampoco perderlo cuando hayan cometido
algun delito y se encuentren redi-
miéndolo en los establecimientos penales,
ó prófugos evadiendo la acción de la ley:

S. A. el R. Gen- te del Reino, de acuer-
do con lo informado por la Dirección ge-
neral de Contabilidad, ha tenido á bien
mandar que las cantidades que no pue-
dan distribuirse por los habilitados en el
término que les está pre- fijado ingresen
en la Caja de De. ó los en concepto de
necesarios, con la previa condición de
que en los resguardos que libremente ofi-
cinas de Hacienda habrán de expresarse

que después de los corridos cinco años
en que los reclamen sus legítimos acre-
dores ó causa- habientes quedarán pres-
critos con arreglo al art. 13 de la ley de
Contabilidad de 20 de febrero de 1850.
De orden de S. A. lo digo á V. I.
para los efectos correspondientes. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid 29
de diciembre de 1869.—Figueroa.—
Sr. Director general de Rentas.

Concluye el REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION ECONOMICA PROVINCIAL.

Art. 121. Los pliegos de los ro-
paros que ocurran, tanto al Tribunal
de Cuentas del Reino como á la Di-
rección general de Contabilidad, en
el examen de las que deban dar los
diversos agentes de la Administración
de la Hacienda, se dirigirán á los
Jefes de las Administraciones, de-
pendencias ó establecimientos en que
sirvan los cuentadantes. Los prime-
ros pasarán con decreto marginal á
los segundos aquellos pliegos en el
acto de recibirlos; cuidándose que
sean solventados los reparos que
contengan dentro del plazo señalado,
y los devolverán á la Superioridad
con oficio en el cual harán cuantas
observaciones puedan convenir para
la mas exacta apreciación de los he-
chos y operaciones á que los mismos
reparos y contestaciones se refieran.

Cuentas y libros.

Art. 122. Las Administraciones
económicas de provincia rendirán al
Tribunal de Cuentas del Reino, por
conducto de la Dirección general de
Contabilidad, las cuentas siguientes:

Mensuales.
De operaciones del Tesoro.
De almacén, ó sea de administra-
ción de tabacos.
De almacén, ó administración de
sales.
De almacén, ó administración del
Sello del Estado.
De administración de frutos de
propiedades del Estado.

Trimestrales.
De rentas públicas.
De gastos públicos.
De valores á cobrar por bienes
enajenados con anterioridad á la ley
de 1.º de mayo de 1855.
De bienes declarados en venta por
las leyes de 1.º de mayo de 1855 y
11 de junio de 1856, y de los pro-
ductos de quiebras, secuestros y al-
cances.

De pagarés de compradores de bie-
nes enajenados en virtud de las mis-
mas leyes de 1.º de mayo de 1855
y 11 de julio de 1856.

Todas estas cuentas serán autori-
zadas por los respectivos Jefes de las
Administraciones económicas y por
los de intervención de las mismas.

Art. 125. Los Jefes de Caja de
las Administraciones económicas ren-
dirán cuentas mensuales del manejo
de fondos que tienen á su cargo.

Estas cuentas de Caja se autoriza-
rán por los cuentadantes y por los
Jefes de intervención, y se visarán y

cursarán á su destino por los Jefes de
las Administraciones económicas de
provincia.

Art. 124. Dejará de rendirse la
cuenta mensual de caudales por pro-
ductos en renta de propiedades del
Estado que daban las Administracio-
nes de Hacienda pública, quedando
suprimida la Caja especial que existía
en las mismas dependencias para la
custodia provisional de aquellos pro-
ductos, los cuales ingresarán direc-
tamente en la Caja general de la
provincia.

Art. 125. Las Administracio-
nes principales de Aduanas rendirán
al Tribunal, por conducto de la Ad-
ministración económica de la respec-
tiva provincia y de la Dirección ge-
neral de Contabilidad, cuentas tri-
mensuales de rentas públicas que au-
torizarán los Administradores ó In-
terventores.

Art. 126. Las Superintenden-
cias de las Casas de Moneda darán
al Tribunal por conducto de la Di-
rección general de Contabilidad las
cuentas que á continuación se ex-
presan:

Mensuales.
De operaciones del Tesoro.
De metales y acuñación de me-
neda.

Trimestrales.
De rentas públicas.
De gastos públicos.

Estas cuentas se autorizarán por
los Superintendentes y por los Con-
tadores ó Interventores.

Art. 127. Los Jefes de Caja de
las Casas de Moneda (hoy Tesoro-
ros) darán cuenta mensual de los
caudales y pastas que manejen. Es-
tas cuentas se autorizarán por los
encargados de la Caja y por los In-
terventores (hoy Contadores), y se-
rán visadas por los Superintenden-
tes, que tendrán á su vez la obliga-
ción de remitirlas al Tribunal por
conducto de la Dirección general de
Contabilidad.

Art. 128. Los Directores de las
minas del Estado rendirán cuentas
mensuales de minerales y metales, y
trimestrales de rentas públicas, de
gastos públicos, y de útiles y efec-
tos. Estas cuentas se autorizarán por
los Directores ó Interventores, y se-
rán remitidas por los Directores al
Tribunal de las del Reino por con-
ducto de la Dirección general de
Contabilidad.

Art. 129. Los Pagadores de las
minas del Estado darán cuenta men-
sual de Caja, autorizándolas los
Interventores, y pasándolas á los
Directores para que con su V.º B.º
las remitan al Tribunal de las del
Reino por conducto de la Dirección
general de Contabilidad.

Art. 130. El Administrador Jefe
de la Fábrica del Sello del Estado
continuará rindiendo al Tribunal de
Cuentas del Reino, por conducto de
la Dirección general de Contabilidad
cuentas mensuales de fabricación y
trimestrales de gastos públicos que
serán autorizadas por el expresado

Jefe, vademus por el Interventor (Ley Contador).

Art. 151. El Guarda-almacén-Tesorerero de la Fábrica del Sello del Estado rendirá también cuentas mensuales de caudales, o sea de Caja, autorizándolas con el Interventor; y pasándolas al Administrador Jefe para que suscribiendo en ellas el V. S. las remita al Tribunal de las del Reino por conducto de la Dirección general de Contabilidad.

Art. 152. Los Administradores Jefes de las Fábricas de Tabacos y los Depositarios-pagadores de los mismos establecimientos continuarán dando al Tribunal las mismas clases de cuentas determinadas en los dos artículos anteriores respecto al Administrador y Tesorerero de la Fábrica del Sello.

Art. 153. Los Administradores principales de las Fábricas de sal rendirán cuentas mensuales de fabricación y de caudales, o sea de Caja, y trimestrales de gastos públicos. En todas ellas los Interventores suscribirán su conformidad.

Art. 154. Todas las cuentas que deben rendir con arreglo a las disposiciones de los artículos que preceden los Administradores principales de Aguas y los Administradores y Pagadores de las Fábricas de Tabacos y de Sales se remitirán por los Jefes de las respectivas dependencias al de la Administración económica de la provincia dentro de los ocho días siguientes al término del periodo mensual o trimestral a que correspondan. Dichas cuentas se revisarán por la Intervención de la Administración económica, comprobando las partidas que deban tener relación con las operaciones de la misma Administración de provincia, como son las de movimiento de fondos y las de remesas de efectos estancados; y una vez realizado este trabajo, se reputarán las de fabricación y de caudales a la Dirección general de Contabilidad, explicando cualquiera diferencia que se haya observado, y las de rentas públicas y gastos públicos se refundirán en las que, por los mismos conceptos y periodos rindan la Administración económica de la provincia, acompañando aquellas parciales como justificantes de la parte respectiva de la general. Todas ellas se remitirán a la Dirección general de Contabilidad dentro del plazo de quince días marcado por la Real orden de 17 de julio de 1868.

Art. 155. Los Jefes de Administración económica de provincia rendirán también mensualmente las cuentas de los servicios especiales de la Hacienda pública y de la Caja de Depósitos. En unas y otras suscribirán su conformidad los Jefes de Intervención, y además en las últimas los Jefes de Caja por la parte relativa a las existencias que resulten en la cuenta de depósitos necesarios. Estas cuentas se remitirán a las Direcciones de los respectivos ramos dentro de los 15 días siguientes al último del mes a que correspondan.

Art. 156. La forma de las cuentas de fabricación, de administración, de pajes y efectos, de operaciones del Tesoro, de rentas públicas y de gastos públicos será la expresada en la instrucción de la Dirección general de Contabilidad de 30 de agosto de 1868. La de las cuentas de Caja se determinará por la misma Dirección general, y la que deban tener las especiales del pago de intereses de la Deuda pública y del servicio de la Caja de Depósitos se dispondrá por las Direcciones de los mismos ramos.

Art. 157. Las cuentas de fabricas, las de almacén o sea de administración, y las de útiles y efectos, se justificarán con estricta sujeción a las prescripciones de la instrucción ya citada de 30 de agosto de 1868. Las de rentas públicas y gastos públicos contendrán, además de los justificantes determinados en la referida instrucción, relaciones mensuales por conceptos, y por artículos de los ingresos y pagos realizados con los cargámenes y libramientos y los justificantes de estos. Dichas relaciones se incluirán en los resúmenes trimestrales, con que aquella instrucción dispuso que se justificaran las columnas de recaudado y pagado de dichas cuentas.

Art. 158. La justificación de las cuentas de operaciones del Tesoro será la que determinó la instrucción de 30 de agosto de 1868; y además, en cuanto a las columnas de ingreso y pagado, los cargámenes y libramientos y sus justificantes que antes se unían a las llamadas de ingresos y pagos.

Art. 159. Las cuentas de Caja de las Administraciones económicas de provincia, de las Casas de Moneda y de las Minas no tendrán mas justificación que la correspondiente a la data. Esta consistirá en facturas por secciones de los libramientos satisfechos. Las facturas correspondientes a las secciones que se refieren a los servicios de los Ministerios diferentes del de Hacienda comprenderán los libramientos que en ellas se detallan. En las de los libramientos expedidos para servicios liquidados por las oficinas de Hacienda suscribirán los Interventores el recibo de estos documentos, que les serán entregados con factura duplicada por los Jefes de Caja o Pagadores para que cuden de su justificación y los unan a las respectivas cuentas de gastos públicos y de operaciones del Tesoro.

Art. 160. La Dirección general de Contabilidad surtirá a todas las dependencias de Hacienda pública en las provincias de ejemplares impresos para la redacción de las cuentas que por su conducto deban rendir aquellas al Tribunal de las del Reino. El mismo Centro circulará modelos de los cargámenes, libramientos, cartas de pago, pedidos de estancieros, guías y demás documentos que deban unirse a las cuentas.

Art. 161. Corresponde a la Dirección general de Contabilidad de la Hacienda pública determinar los li-

bros de cuenta y razón que deban llevar todas las dependencias de la Administración económica provincial; circulará desde luego los oportunos modelos, y propondrá al Ministerio de Hacienda lo que considere conveniente a fin de que los del próximo año económico se hagan bajo su inmediata inspección.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 142. Luego que sea publicado este reglamento, los Jefes de las Administraciones económicas, de acuerdo con todos los Jefes de Sección, distribuirán el personal entre las diferentes Secciones con arreglo a las obligaciones que a cada una le impone. Hecha la distribución, se pondrá en conocimiento del Ministro de Hacienda por medio de relación autorizada por el Jefe de la Administración y por todos los Jefes de las Secciones.

El Ministro de Hacienda aprobará, con las modificaciones que estime procedentes, la distribución del personal de las Administraciones económicas, y circulará en su consecuencia la planta definitiva de cada una de las Secciones.

Art. 143. El Ministro de Hacienda dispondrá lo conveniente para que las Direcciones generales del departamento de su cargo adopten por sí o le propongan las resoluciones que puedan facilitar el exacto cumplimiento del presente reglamento.

Madrid 8 de diciembre de 1869. —Riquelme.

(Gaceta núm. 345)

MINISTERIO DE HACIENDA.

Circular.

Al remitir a V. S. adjunto el reglamento para la Administración económica provincial, no puedo menos de manifestarle, para su mejor inteligencia y la de los demás empleados que le están subordinados, cual ha sido el objeto que el Gobierno se propuso alcanzar con la reforma acordada, y cuales los resultados que en beneficio del servicio espera del celo de todos los funcionarios encargados de su ejecución.

El estado económico del país ha impuesto obligaciones imperiosas al Gobierno para disminuir los gastos públicos; obedeciendo a esta necesidad se dictó la orden de 30 de junio último, por medio de la cual se refundió la Administración central de la provincia en las Administraciones económicas, obteniendo por este medio una disminución en los gastos de cerca de cuatro millones de reales; como esta economía no podía conseguirse sin disminuir el personal, fué necesario también simplificar la tramitación de los expedientes y toma de razón de los hechos administrativos; y si por el primer concepto hubo una baja de trescientos individuos, por el segundo se evitaron las duplicaciones y hasta triplicaciones que existían en algunos trabajos; se redu-

jeron notablemente los trámites a que se sujetaban muchos asuntos, y se redujo también el número de cuentas con simplificación sensible de sus justificantes.

El Gobierno cree que la reforma así emprendida no ha de lastimar los intereses de la Hacienda, ni en los medios para desenvolver su administración, ni en los resultados de su recaudación y contabilidad.

Cierto es que, conciliando con una situación política enteramente nueva, tenía una dificultad mas que vencer; dificultad inherente a todo cambio radical, y que todavía no ha podido evitarse por la constante movilidad del personal de la Administración pública.

Pero a pesar de todo, el Gobierno espera que, compensando la suma de unas cualidades la falta que haya de otras, puede llegar a obtenerse un éxito favorable en el conjunto de la Administración encomendada a V. S.; para ello deberá mantener entre todos sus subordinados una disciplina completa, basada en el ejemplo de una conducta laboriosa dispuesta siempre a hacer que todos cumplan sus deberes.

Por otra parte deben penetrarse los distintos Jefes que constituyen la agrupación denominada Administración económica que no funcionan mas que como parte de un todo, y que en tal sentido son los unos auxiliares indispensables de los otros. Que si la organización de toda gestión económica requiere el principio de intervención, todas las operaciones de la contabilidad que el reglamento le asigna son operaciones de orden de la Sección administrativa, que lo mismo tendría que llevar esta sin su auxiliar la interventora.

Léjos, pues, de ser esta una atribución enojosa, la conducta de los funcionarios debe hacerla apreciable y de provechosos resultados. La acción interventora es de advertencia, de examen y consejo respecto a los funcionarios compañeros con quienes se ejerce, de aviso cuando se documenta a la Superioridad; pero siempre, fundada en su origen, conciliadora en su manifestación, inflexible en su propósito.

Los intervenidos deben acoger sin prevenciones toda advertencia nacida de la intervención; ver en ella la observación amistosa que les ayuda, en lugar de la oposición indiscreta que les molesta, puesto que todos, en el cumplimiento de su deber y en los medios de realizarlo, tienen un fin común, cual es el mejor servicio del Estado.

Sólo así puede existir entre los diversos funcionarios de una misma dependencia la armonía indispensable para que, confundidos en un deseo común, obtenga el servicio público las ventajas que deba reportarle la suma de laboriosidad e inteligencia de todos sus empleados.

Si importante es para la Administración mantener orden y concierto interior en sus dependencias, no lo es ménos para el crédito de aquélla

el sostener en sus relaciones con el público una cordialidad perfecta.

Nuestras leyes administrativas son aplicadas muchas veces bajo un criterio restrictivo superior al que las mismas contienen, defecto que produce una separación constante entre los intereses particulares y los del Estado.

Preciso es que, al iniciarse una política expansiva y liberal como nunca ha gozado la Nación, euiden los funcionarios públicos de ajustar su conducta y su criterio administrativo á hacer desaparecer la idea, demasiado arraigada por desgracia, de que la Administración es enemiga de todo interés particular ó privado.

Una conducta proba hasta la exageración, activa é inteligente, que lejos de poner obstáculos á la acción individual en sus relaciones con la Administración facilite su acceso con el consejo, el trabajo asiduo y la deferencia personal, tanto más necesaria cuanto más desvalida sea la persona que demanda el servicio, llegará con el tiempo á estrechar las relaciones del Estado con el público, que al fin habrá de convencerse de que lejos de ser los Gobiernos el azote de los pueblos, como se supone muchas veces falsamente, son sus delegados para llenar en nombre de los intereses colectivos una serie de obligaciones y deberes que tienen por exclusivo objeto el bien de todos, desarrollado por medio de servicios generales de utilidad común que nunca pueden abandonarse al interés aislado del individuo.

En esta parte desea el Gobierno que tanto V. S. como sus subordinados hagan los mayores esfuerzos para identificar los intereses particulares con los de la Administración pública.

Si las vicisitudes políticas que en una larga serie de años trabajan la patria han impedido dotar á la Administración de un personal tan distinguido como se necesita para que el país disfrute los beneficios de su inteligencia y probidad, debemos esperar que estos males tengan ya su término, y para anticiparlo hará el Gobierno toda clase de esfuerzos. Entre tanto se propone vigilar asiduamente todos los servicios que constituyen el haber del Tesoro, procurando que el personal de su Administración reúna condiciones apropiadas para llenar acertadamente su cometido. No transigirá con aquellos empleados que estén faltos de las cualidades necesarias para serlo convenientemente; premiará á los buenos servidores, y hará por que las carreras administrativas de Hacienda dejen de ser el recurso con que por desgracia se procuran pagar demasiado prodigamente los servicios privados.

La unidad que se ha dado á la acción administrativa debe también producir resultados favorables en el conjunto de los trabajos de la Administración económica. Penetrado V. S. de esta verdad, debe dar vígioso impulso á todos ellos; teniendo

presente que en casos extraordinarios puede destinar indistintamente el personal de las diferentes secciones á levantar los servicios de reconocida urgencia ó de preferente interés para el Estado.

Las reformas se inician rápidamente; pero se perfeccionan con lentitud, y mucho más cuando se refieren á servicios vastos y tan importantes como los de Hacienda. Convencido de esto el Ministro que suscribe se propone recoger todos los datos que conduzcan á perfeccionar el reglamento que se circula con el fin de proceder á su reforma oportunamente. En tal sentido acogerá toda observación dirigida á llenar las omisiones que pueda tener ó á modificar sus defectos.

Por último, es indispensable que en la organización de los servicios y distribución de negociados y de personal procure V. S. observar con la mayor exactitud las prescripciones del reglamento, supliendo con su celo cualquier vacío que en el mismo encontrare, y consultándose directamente las dudas que se le ocurran.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de diciembre de 1869.—Figuerola.—Sr. Jefe de la Administración económica de la provincia de....

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

D. Menendo Valledor, caballero de la distinguida orden española de Carlos III y juez de primera instancia de Fonsagrada en la provincia de Lugo.

A los Sres. jueces de primera instancia, alcaldes populares y demás autoridades civiles y militares de la de Orense, hago saber: que me halló instruyendo causa de oficio sobre robo de 23.780 rs., verificado el día 9 de noviembre último en la casa del presbítero D. Bonifacio Gomez, vecino del pueblo de la Rivera de S. na, ayuntamiento de Nave de Suarna en este partido, por ocho hombres armados, en cuya causa he acordado detener y tomar declaración indagatoria como presuntos autores del delito á Francisco Mendez Monasterio (a) Guedello, Manuel Mendez y Manuel Lopez Cabadas, vecinos del lugar de Vilar de Donis, ayuntamiento de Corvanter en el juzgado de Bacerreá, y como no hubiesen podido ser habidos á pesar de las diligencias al efecto practicadas, acordé también en providencia de esta día exhortar á V. SS. como lo verifico por medio de la inserción del presente en el Boletín oficial de la provincia, requiriéndoles en nombre de S. A. el Regente del Reino y rogándoles en el mío, que por cuantos medios los sugiera su buen celo, procuren descubrir el paradero de dichos tres sujetos, detenerlos con el dinero y efectos que se les encuentre y poner unos y otros con la debida seguridad á mi disposición, en lo que administrarán justicia é yo quedo obligado á hacer lo mismo en casos iguales. Para que puedan ser reconocidos se inserta á continuación sus señas y se expresan las monedas que componían la cantidad robada.

Fonsagrada 30 de diciembre de 1869.—Menendo Valledor.—Por mandado de S. S., Felipe Sainz.

Monedas que componían la cantidad robada.

Cinco onzas y siete onzas de oro, cuatro de ellas de premio ó de las conchadas por pelucones, una del rey Felipe V, tres de Fernando VI y las demás de Carlos III y

Carlos IV, 1 360 rs. en medias onzas, 5 100 rs. en doblones de 100 rs. y cuatro pesas fuertes en plata, y componen los 23 780 rs.

Señas personales de los tres sujetos expresados.

Manuel Mendez, es de unos 36 á 40 años de edad, estatura alta, cara redonda, buen color, pelo y ojos castaños, nariz regular, barba poblada; acostumbra á vestir calzon y chaqueta de sayal y cubre la cabeza con un sombrero bajo negro.

Manuel Lopez Cabadas, es de edad mayor de 30 años, estatura cumplida, cara regular, nariz regular, color trigüño, barba y pelo algo canoso y viste calzon corto y chaqueta de sayal y á la cabeza un sombrero bajo negro.

Francisco Mendez Monasterio (a) Guedello, es de unos 56 años de edad, estatura cumplida, nariz roma, color trigüño, ojos garzos, barba y pelo también canosos y lleva una cicatriz en una de las mejillas sobre el labio superior junto á la nariz; acostumbra á vestir pantalón, chaqueta y chaleco de paño, capa castaña con broches amarillos y cubre la cabeza con un sombrero bajo de color.

D. Luis Veira, juez de primera instancia del partido de Arzúa etc.

Por el presente edicto y en virtud de lo dispuesto en la circular de la Real Audiencia de esta Audiencia territorial, su fecha 5 de mayo del año último, se llama á Josefa Garcia Sierra, vecina de San Esteban de Villamor en este partido, para que en el término de treinta días se presente en este juzgado á oír la sentencia dictada por el tribunal superior en causa que se le formó sobre hurto, y á la vez pide y ruego á las autoridades así civiles como militares, procuren la captura de dicha muger, para lo que se consigna á seguida nota de su filiación; y caso de ser habida la pongan á disposición de este referido juzgado.

Dado en la villa de Arzúa á 23 de diciembre de 1869.—Luis Veira.—Por su mandado, Juan Platas y Freire.

Señas de Josefa Garcia Sierra.

Estatura completa, pelo castaño oscuro, cara redonda, ojos castaños oscuros, nariz regular; vestía saya de lana y estopilla, dague de paño negro, pañuelo á la cabeza, calza zuecos.

D. Luis del Castillo, juez de primera instancia de Cambados.

Por el presente cito, llamo y emplazo á todos los que se crean con derecho á la herencia de Alberto Rodriguez y Serantes, vecino que ha sido de la parroquia y ayuntamiento de Rivadavia, perteneciente á este partido judicial, para que dentro de treinta días contados desde la publicación del presente en la Gaceta de Madrid, comparezcan en este juzgado y escribanía del que refrenda á deducir lo que les convenga; pues en otro caso le parará el perjuicio que haya lugar.

Cambados diciembre 25 de 1869.—Luis del Castillo.—Por su mandado, Luis Vazquez de Castro.

D. Secundino Fernandez Perez, juez de primera instancia del partido de Ganzo de Limia.

Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan Antonio Lorenzo, vecino de Calvos de Randin, para que en el preciso término de nueve días comparezca en la escribanía del que autoriza con el fin de ser notificado, citado y emplazado para ante la Audiencia del territorio de la sentencia pronunciada en primera instancia en causa que se le formó por falsificación, prestando que de no verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar.

Ganzo de Limia 13 de diciembre de

1869.—Secundino Fernandez.—D. S. O., Francisco Cadorniga.

D. Manuel Otero, juez de primera instancia de la ciudad de Pontevedra y su partido.

Por el presente se cita y llama á Francisco Plana Fernandez, hijo de Peregrin y Dolores, natural de Bauduciel de la Calzada, partido y provincia de Salamanca, vecino del Carballino, casado, tratante de lora y cristal, de 32 años de edad, conocido por Quiro, para que en el término de treinta días comparezca en la sala de audiencia de este juzgado, con el fin de ser notificado, citado y emplazado de la sentencia que recayó en la causa que contra el mismo y otros se ha seguido por vagancia; pues de no verificarlo se sustanciará el procedimiento en rebeldía, practicándose todas las diligencias que ocurran en los estrados del tribunal y le parará el perjuicio que haya lugar.

Pontevedra enero 1 de 1870.—Manuel Otero.—Martin Rial.

AYUNTAMIENTO POPULAR DE MADRID.

De los partes remitidos en el día de hoy por la Intervención del mercado de granos y nota de precios de artículos de consumo, resulta lo siguiente:

PRECIOS DE ARTÍCULOS AL POR MAYOR Y MENOR.

Carne de vaca, de 4 400 á 5 escudos arroba, y de 0'153 á 0'176 escudos libra.

Id. de certero, de 0'153 á 0'176 escudos libra.

Id. de ternera, de 0'400 á 0'500 escudos libra.

Tosino añejo, de 8'500 á 8'400 escudos arroba, y de 0'370 á 0'394 escudos libra.

Idem fresco, de 0'312 á 0'350 escudos libra.

Jamon, de 0'500 á 0'600 escudos libra.

PRECIO DE GRANOS EN EL MERCADO DE AYER.

Cebada, de 2'100 á 2'200 escudos fanega.

Trigo vendido.... 771 fanegas.

Precio medio.... 4'614 escudos.

NOTA.—Reses degolladas ayer:

102 vacas, que hacen 42.641 libras de peso.

456 carneros, que hacen 12.962 idem.

185 cordos, que hacen 42.968 idem.

51 terneras.

389 corderos lechales.

352 cabritos.

Lo que se anuncia al público para su inteligencia.

Madrid 7 de enero de 1870.—El Alcalde primero, Nicolás Maria Rivero.

ANUNCIOS NO OFICIALES.

DON PEDRO VILA, PRESBITERO, vecino de esta ciudad, dá las gracias al Oficial de la Guardia civil del puesto de Celanova D. Francisco Muñoz y Ramos, por la exactitud y buen servicio prestado en el descubrimiento del paradero de un perro de perdices que se perdió el día 12 de diciembre del año 1868, y que le ha sido entregado en el día de hoy.

Orense 11 de enero de 1870.

COMO CUMPLIDOR Y TESTAMENTO del difunto D. Damian Blanco y Guzman, natural que fué de S. Pelajo de Bóveda, pueblo de Seijo, se anuncia la venta de todos sus bienes rústicos y urbanos sitos en dicha parroquia, para el domingo 16 del corriente mes, en la casa habitación que fué del mismo Guzman, á las dos de la tarde de dicho día en que se rematarán al más ventajoso postor. Orense enero 10 de 1870.—Gabriel Perez Blanco.

IMPRESA DE D. FRANCISCO FAZ.